

Documentos  
Concernientes a los  
Archivos Nacionales



DECRETOS NUMERO 195 DE 1924

(de 1o. de Noviembre)

por el cual se fijan las fianzas que deben prestar los empleados de los Archivos Nacionales.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo 1o. La cuantía de las fianzas que deben prestar los empleados subalternos de los Archivos Nacionales, de acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 4a. de 24 de Septiembre último, queda fijada así:

El Subdirector . . . . .	B. 5,000.00
Los Jefes de Sección . . . . .	2,000.00
Los Oficiales Primeros . . . . .	1,000.00
El Encuadernador . . . . .	750.00
Los Oficiales Segundos . . . . .	500.00
El Ayudante del Encuadernador . . . . .	300.00
Los Oficiales Terceros . . . . .	300.00
Los Oficiales Cuartos . . . . .	200.00
Los Oficiales Ayudantes del Encuadernador . . . . .	200.00
Los Porteros . . . . .	100.00

Artículo 2o. El Director de los Archivos Nacionales prestará la fianza que establece el inciso primero del citado artículo 12 de la Ley 4a. mencionada antes.

Artículo 3o. Las fianzas del Director y Subdirector de los Archivos Nacionales serán hipotecarias o prendarias o personales, siempre que el fiador tenga bienes raíces inscritos en el Registro de la Propiedad cuyo valor declarado sea, por lo menos, cuatro veces mayor que la respectiva fianza. Las hipotecarias se prestarán de acuerdo con la ley; las prendarias serán depositadas en el Banco Nacional y las personales ante el Secretario de Gobierno y Justicia, y serán registradas.

Artículo 4o. Los empleados nombrados para desempeñar puestos en los Archivos Nacionales tienen un plazo de treinta días para cumplir con esta formalidad, pasado el cual se declararán insubsistentes los nombramientos de aquellos que no la hayan llenado.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a primero de Noviembre de mil novecientos veinticuatro

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 217 DE 1925

(de 16 de Diciembre)

por el cual se reglamenta el cobro de derechos por las copias y certificados que se expidan en los Archivos Nacionales.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades legales, y de acuerdo con las Leyes 57 de 1919 y 4a. de 1924,

DECRETA:

Artículo 1o. Para los efectos fiscales, los documentos que reposan en los Archivos Nacionales se distribuyen en dos grupos, así:

Primero. Los de la Sección Jurídica.

Segundo. Los de las Secciones Histórica y Administrativa.

Artículo 2o. Las copias de cualesquiera de los documentos que componen el primer grupo pagarán un balboa (B. 1.00) por la primera página y cincuenta centésimos de balboas (B. 0,50) por cada una de las siguientes. Si se tratare de asuntos del ramo criminal, la tarifa se reducirá a la mitad.

Artículo 3o. Las copias de cualesquiera de los documentos que componen el segundo grupo pagarán veinticinco centésimos de balboas (B. 0,25) por cada página.

Artículo 4o. Las copias que soliciten los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones y en negocios cuya tramitación tiene lugar de oficio, no pagarán impuesto alguno. Tampoco lo pagarán aquellas copias en que tengan interés la Nación o los Municipios.

Artículo 5o. Las solicitudes de copias de documentos existentes en los Archivos Nacionales se harán en papel sellado de primera clase. Las de documentos del primer grupo podrá hacerlas el mismo interesado verbalmente. Quedan exceptuados de las disposiciones de este artículo los casos previstos en el anterior.

Artículo 6o. Fuera del Distrito donde se encuentra la capital de la República, las copias pueden solicitarse por telégrafo, previo certificado de la respectiva oficina telegráfica de que la solicitud ha sido hecha en forma legal, y siempre que alguien suministre aquí el papel sellado necesario.

Artículo 7o. Los certificados que a petición de algún particular expida el Director de los Archivos Nacionales pagarán un balboa con cincuenta centésimos (B. 1.50) por la primera página y cincuenta centésimos de balboa (B. 0,50) por las restantes.

Artículo 8o. Los derechos que se perciban conforme a las disposiciones del presente Decreto ingresarán al Tesoro Nacional y se pagarán en la Sección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Tesoro.

Artículo 9o. El Director de los Archivos Nacionales no entregará ninguna copia mientras no se le haya llevado el comprobante de que se ha pagado el valor de la misma.

Artículo 10o. Al margen de todo documento del cual se expida una copia se pondrá una anotación en que conste este hecho y la fecha de la expedición de la misma. Además de esto, se llevará un registro de las solicitudes de copias y certificados que se hagan, indicando a continuación el valor de los mismos. Este registro será firmado cada día por el Director de los Archivos, quien tam-

bién está obligado a rendir un informe al respecto, sobre este mismo asunto al Secretario de Gobierno y Justicia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los dieciséis días del mes de Diciembre de mil novecientos veinticinco.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

#### RESOLUCION NUMERO 148

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 148.—Panamá, 12 de Agosto de 1925.

El señor DIRECTOR DE LOS ARCHIVOS NACIONALES, en oficio del 3 del mes en curso, ha hecho a este Despacho la siguiente consulta:

“Si el artículo 13 de la Ley 4a. de 1924, orgánica de los Archivos Nacionales, prohíbe al Director de esa Institución conceder desgloses de documentos archivados allí, puede ese empleado devolver a los funcionarios que lo soliciten los expedientes completos, facilitando de esta manera la concesión de desgloses fuera de los Archivos Nacionales y burlando así la Ley?”

Para resolverla se avanzan las siguientes consideraciones:

El artículo 13 de la Ley 4a. de 1924, prohíbe los desgloses de los documentos de expedientes y legajos archivados en los Archivos Nacionales. Sin embargo, la ley no dice si un documento, por el sólo hecho de ingresar a la oficina de los Archivos Nacionales, debe considerarse como archivado allí definitivamente. Y es indispensable que esto se determine, puesto que con frecuencia se ha dado el caso de que hayan entrado a la institución nombrada expedientes y documentos pendientes aún de resolución definitiva, cuya devolución ha sido pedida por la oficina de origen. Parece que la repetición de casos como el expuesto es la que ha dado origen a la presente consulta. Ahora bien, en cada caso particular y de acuerdo con nuestras leyes de procedimiento, deben ingresar a los respectivos archivos de las oficinas públicas los expedientes y legajos relacionados con asuntos terminados definitivamente. Por otra parte, los Archivos Nacionales no son otra cosa que una centralización de los distintos archivos de la Nación, a efecto de que puedan ser conservados con la mayores seguridades y metódicamente ordenados para hacer fácil su consulta y estudio. Y siendo las cosas como quedan expuestas, es claro que el Director General de los Archivos Nacionales puede devolver los expedientes y legajos que conserva en la institución a su cargo siempre que dichos expedientes y legajos traten de asuntos que no han sido resueltos de modo definitivo o que no han fenecido legalmente. Por lo demás, queda prohibida en absoluto la salida del local de los Archivos

Nacionales de cualesquiera otras clases de expedientes, legajos y documentos.

En estos términos queda resuelta la presente consulta.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

Documentos  
Relacionados con  
el Establecimiento de  
Bancos en la República





DECRETO NUMERO 5 DE 1925

(de 12 de Enero)

por el cual se autoriza a The Chase National Bank of the city of New York, de los Estados Unidos de Norte América, para hacer negocios en la República por medio de dos sucursales.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

1. Que The Chase National Bank of the city of New York, institución bancaria organizada conforme a las leyes federales de los Estados Unidos de Norte América, ha solicitado permiso para hacer negocios en la República por medio de dos sucursales que se establecerán, una en Panamá y otra en Colón;

2o. Que se han acompañado a la solicitud documentos fehacientes satisfactorios; y

3o. Que el artículo 5o. de la Ley 37 de 1917 dispone que mientras que no se dicte una ley general de Bancos que regule la organización, el establecimiento y la inspección de los Bancos de depósito, giro y descuento, no podrá establecerse ni hacer negocios en el país ningún Banco que no esté previamente autorizado para ello por un decreto especial del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo único. Se autoriza al The Chase National Bank of the city of New York, institución bancaria organizada de conformidad con las leyes federales de los Estados Unidos de Norte América, con su oficina principal en la ciudad de Nueva York, para que establezca dos sucursales en la República, una en Panamá y otra en Colón, y para que pueda hacer negocios aquí, ajustándose a las leyes nacionales.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los doce días del mes de Enero de mil novecientos veinticinco.

R CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 40 DE 1926

(de 12 de Marzo)

por el cual se autoriza a "The National City Bank of New York" de los Es-

tados Unidos de Norte América, para hacer negocios en la República por medio de dos sucursales.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que The National City Bank of New York, institución bancaria organizada y autorizada conforme a las leyes federales de los Estados Unidos de Norte América, ha solicitado permiso para hacer negocios en la República por medio de dos sucursales que se establecerán una en Panamá y otra en Colón.

Que se han acompañado a la solicitud documentos fehacientes satisfactorios; y

Que el artículo 50. de la Ley 37 de 1917 dispone que mientras no se dicte una ley general de bancos que regule la organización, el establecimiento y la inspección de los bancos de depósito, giro y descuento, no podrá establecerse ni hacer negocios en el país ningún banco que no esté previamente autorizado para ello por Decreto especial del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Artículo único. Se autoriza a The National City Bank of New York, institución bancaria organizada de conformidad con las leyes federales de los Estados Unidos de Norte América, con su oficina principal en la ciudad de New York, 55 Wall Street, para que establezca dos sucursales, una en Panamá y otra en Colón y para que pueda efectuar negocios aquí, ajustándose a las leyes nacionales.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los doce días del mes de Marzo de mil novecientos veintiséis.

R CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

Documentos  
Relativos a la Colonia  
Penal de Coiba y a la  
Circunscripción de San Blas



DECRETO NUMERO 32 DE 1925

(de 25 de Febrero)

sobre medidas de guerra.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades constitucionales, y

CONSIDERANDO:

Que los indígenas de San Blas se han rebelado contra las autoridades constituidas de la Nación; y

Que es preciso debelar esa rebelión por medio de operaciones militares, si fuere preciso,

DECRETA:

Artículo 1o. El Cuerpo de Policía Nacional queda convertido en una fuerza militar bajo el mando inmediato de los Jefes respectivos;

Artículo 2o. Mientras la Policía Nacional se halla en servicio militar, el servicio de policía se prestará en las ciudades de Panamá con la cooperación de los Cuerpos de Bomberos de una y otra ciudad, y en conformidad con el acuerdo del caso entre los Jefes de dichas instituciones.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los veinticinco días del mes de Febrero de mil novecientos veinticinco.

R CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 48 DE 1925

(de 25 de Marzo)

por el cual se nombra Intendente de la Circunscripción de San Blas Blas.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Se nombra al señor Luis Hernández R. Intendente de la

Circunscripción de San Blas, con derecho a sueldo desde el día 1o. del presente mes, fecha en que comenzó a prestar sus servicios.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los veinticinco días del mes de Marzo de mil novecientos veinticinco.

R CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

---

DECRETO NUMERO 83 DE 1925

(de 1o. de Julio)

por el cual se reorganiza la Colonia Penal de Coiba.

*El Presidente de la República,*

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo 1o. Queda establecida una Colonia Penal en la Isla de Coiba.

Artículo 2o. La Colonia Penal de Coiba estará formada por los reos que, según los decretos número 20 de 1924 y número 14 de 1925, deben cumplir sus condenas en ese establecimiento penitenciario y por aquéllos otros que a juicio del Poder Ejecutivo sea necesario enviar a ese lugar.

Artículo 3o. Los reos que ingresan a la Colonia Penal de Coiba serán destinados a las obras agrícolas o de cualquier otra índole que se emprendan en la misma, en concepto de braceros, operarios o maestros de obra, según su conducta, aptitudes y clase de pena que cumplan.

Artículo 4o. Queda prohibido el acceso de naves a las aguas comprendidas en la zona de tres millas a partir de la costa de la isla de Coiba, exceptuándose las que deban arribar allí en virtud de contrato con el Gobierno Nacional, las que hayan sido previamente autorizadas por éste, las que sean de propiedad del mismo Gobierno y las que se encuentran obligadas a ello por fuerza mayor plenamente comprobada.

Artículo 5o. El Director de la Colonia Penal de Coiba se encuentra en el deber de dar parte a la Secretaría de Gobierno y Justicia de todas las infracciones a la prohibición del artículo anterior.

Serán penados por el Poder Ejecutivo, con multa de veinticinco a doscientos cincuenta balboas, los capitanes o dueños de buques responsables de violaciones a la expresada prohibición.

Artículo 6o. Queda también prohibido a los particulares desembarcar en la isla de Coiba sin permiso escrito de la Secretaría de Gobierno y Justicia, bajo pena de arresto inmutable hasta por treinta días, que impondrá el Jefe de la Colonia Penal una vez comprobada la infracción. Esta pena se cumplirá en la misma Colonia y quienes la hayan cumplido serán expulsados luego de allí.

Se exceptúan de la presente disposición los náufragos, tripulantes y pasajeros de buques que por causa de fuerza mayor plenamente comprobada se hayan visto obligados a recalar en Coiba, quienes podrán permanecer hasta ocho días en la Colonia, mientras puedan darse de nuevo a la mar.

Artículo 7o. Quedan absolutamente prohibidos la introducción, fabricación, venta y consumo de bebidas embriagantes en la Colonia Penal de Coiba. Quienes contravinieren la presente prohibición serán penados por el Director de la Colonia hasta con cien balboas de multa o arresto equivalente si se tratare de reos. Si el infractor fuere empleado público, el Poder Ejecutivo, decretará, además, su destitución.

Artículo 8o. Quedan también prohibidos todos los juegos con apuestas, cualquiera que sea la naturaleza de dichos juegos, bajo pena de multa hasta por cincuenta balboas o arresto equivalente, si fueren reos los contraventores. Lo dicho se entiende sin perjuicio de las sanciones a que se hubieren hecho acreedores los responsables por infracciones a las leyes sobre juegos de suerte y azar.

Artículo 9o. Los productos de la Colonia que no sean necesarios para el consumo de la misma o que no se puedan conservar por largo tiempo, se remitirán a Panamá, consignados al Jefe de Materiales y Compras para su venta, y el valor de ésta, una vez realizada, deberá ser depositado en el Banco Nacional a la orden de la Secretaría de Gobierno y Justicia.

Artículo 10. El Ecónomo de la Colonia Penal, cuando efectúe alguna de las remesas de que trata el artículo anterior, dará aviso detallado de la misma remesa a la Secretaría de Gobierno y Justicia y al Jefe de Materiales y Compras, encontrándose este funcionario obligado a dar a la expresada Secretaría cuenta de la manera como haya vendido esos productos y de los depósitos que vaya haciendo.

Artículo 11. El Jefe de Materiales y Compras es responsable con su sueldo y haberes de la pérdida o deterioro de los productos que reciba, si no se comprueba que ha procurado, de manera diligente, su venta a los precios corrientes.

Artículo 12. Al fin de cada año, a contar del mes de Julio, el Secretario de Gobierno y Justicia hará pasar a los haberes del Tesoro Público el 50% de los depósitos que hubieran ingresado en el Banco Nacional, dando cuenta de esto a la Secretaría de Hacienda y Tesoro. El resto de los ingresos pasará a formar parte de un fondo que continuará a la orden del Secretario de Gobierno y que se destina a auxiliar a los reclusos de la Colonia que recobren su libertad, cuando carezcan de recursos suficientes para recomenzar su vida de hombres libres.

Artículo 13. El auxilio de que trata el artículo anterior, se otorgara por la Secretaría de Gobierno y Justicia en proporción al tiempo que el ex-recluso hubiere estado en Coiba y no podrá pasar de siete balboas y medio (B. 7.50) por cada mes de permanencia en ese lugar.

Estos auxilios quedan suspendidos una vez que se agote el fondo destinado a dicho fin y volverá decretarse cuando se reponga en la forma establecida en el presente decreto.

Artículo 14. Para la dirección, vigilancia, régimen y servicio de la Colonia Penal de Coiba, habrá el personal que se determina en el presente artículo, con las asignaciones que a continuación se expresan: